

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310502120170055101, promovido por el señor **GUILLERMO DE JESÚS OCAMPO RICO** en contra de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, con la finalidad de conocer en consulta, la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **286**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El demandante interpuso acción judicial, solicitando se condene a Empresa Públicas de Medellín en su calidad de conmutante de los derechos y obligaciones de EADE SA ESP liquidada a reajustar la pensión de jubilación del demandante teniendo en cuenta para ello todos los conceptos devengados en el último año, y como consecuencia a ello, se ordene el pago de la diferencia que resulte entre la suma liquidada y la que fue pagada desde el 16 de mayo del año 2002 con las mesadas adicionales, los intereses moratorios y la indexación a la que haya lugar.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que trabajó a la empresa EADE SA ESP desde el 30 de julio del año 1979 al 15 de mayo de 2002 y fue pensionado por la empresa, el 28 de mayo del año 2002 bajo la resolución 0035438. Enunció que, en dicha entidad, se encontraba cobijado bajo un plan de pensiones anticipadas que, fue aprobado mediante acta número 168 de 21 de diciembre del año 2001, consagrada en la adenda a la convención colectiva de trabajo 2001-2003 suscrita entre el sindicato y la empresa, la cual, indica: “La pensión de jubilación, se liquidará tomando el 75% de lo devengado en el último año de servicios”.

Narró que es beneficiario de la convención colectiva enunciada y que, habiéndose pensionado en suma de \$852.877 teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicio, debió recibir una asignación de \$1.505.653, pues la demandada omitió, tener en cuenta todos los conceptos convencionales. Explicó que EADE y EPM celebraron el contrato número 14657 denominado: “Contrato de conmutación pensional entre la empresa Antioqueña de Energía SA ESP en liquidación y las Empresas Públicas de Medellín”, en el que, esta última entidad asume el pago de las obligaciones pensionales.

Admitida la demanda, la accionada Empresas Públicas de Medellín, aceptó el reconocimiento de la pensión anticipada por parte de EADE al demandante, con la obligación de continuar cotizando hasta que cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el RPM, pero negó la obligación de reliquidación pensional narrada por el actor. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e

interpuso las excepciones que denominó: “*pago*”, “*inexistencia sustancial del derecho*”, “*prescripción*”.

En sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la accionada de todas las pretensiones invocadas en su contra, bajo el entendido, que la prestación debió liquidarse de acuerdo a lo previsto en el decreto 1158 de 1994.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Corrido traslado para alegar, las partes no hicieron pronunciamiento alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo al grado jurisdiccional de Consulta, consiste en determinar si hay mérito para entender que la convención colectiva de trabajo 2001-2003 traía conceptos diferentes para liquidar la pensión anticipada de jubilación y si, por ende, le asiste razón al demandante a la reliquidación de la mesada pensional.

CONSIDERACIONES

Para el 16 de abril del año 2002 el aquí demandante presentó su renuncia al cargo de conductor general con el fin de acogerse de manera voluntaria al plan de pensiones anticipadas. Con la Resolución 035438 de 2002, se constata que EADE reconoció al demandante en calidad de trabajador oficial y conforme al acta 168 de 21 de diciembre de 2001, en donde se autoriza el Plan de Pensiones Anticipadas, una pensión anticipada desde el 15 de mayo de dicho año en suma de \$852.877, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año por el demandante.

En el mismo acto administrativo, se indica que, el trabajador se obliga a iniciar el trámite de reconocimiento pensional con antelación de seis meses antes de cumplir la edad ante el administrador del Régimen de Prima Media.

Allegado por la parte accionante, reposa la convención colectiva de trabajo 2001-2003, con la respectiva nota de depósito, suscrita entre empresa Antioqueña de Energía SS ESP y Sindicato de Trabajadores de la Electricidad en Colombia “Sintraelecol” y en la que se lee:

“ARTÍCULO TERCERO: La Pensión de Jubilación, se liquidará tomando el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio y se reconocerá hasta cuando cumpla los requisitos legales para acceder a la pensión en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. La EADE S.A. ESP en ese lapso de tiempo, continuará efectuando los aportes para el Sistema General de Pensiones. Y a los aportes a la E.P.S. en salud estarán a cargo del beneficiario de esta prestación.

PARÁGRAFO: Una vez el pensionado acceda a la pensión del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, la Administradora de Pensiones procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por la administradora de pensiones y la que venía cubriendo la EADE.”

Mediante Resolución 27 allegada por la pasiva, se prorrogaron los planes de pensiones anticipadas y de retiro voluntario hasta el 15 de octubre del año 2002. Nótese como del texto descrito no se establece uno a uno los valores que hacen parte como factor salarial para determinar el valor de ese 75%.

Por su parte, el decreto 1158 de 1994 por el cual se modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994 establecía lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

- b) Los gastos de representación;*
- c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;*
- d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;*
- e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;*
- f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;*
- g) La bonificación por servicios prestados”.*

Nótese pues, como el artículo descrito si enuncia con claridad los conceptos que deben tenerse en cuenta para determinar la denominada base de cotización. En sentencia SL 4511-2021, radicada 79466 del 18 de agosto de 2021 - sobre el tema de aplicación del Decreto 1158 de 1994 cuando la norma convencional no especifique los factores salariales para liquidar la prestación, como acontece en el presente asunto, dijo la Corte lo siguiente:

“En el contexto que antecede le corresponde entonces a la Sala dilucidar si la pensión reconocida al demandante debía ser liquidada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, lo anterior, puesto que la norma convencional dispone que debe liquidarse la pensión de conformidad con el promedio de lo devengado por el trabajador durante el último año de servicios. Así las cosas, y a efectos de resolver el problema jurídico planteado la Sala considera pertinente reiterar el criterio señalado en la sentencia CSJ SL-1982 -2021, al decidir una situación similar. La Sala considera pertinente reiterar el criterio señalado en la sentencia CSJ SL-1982 -2021, al decidir una situación similar. En el precedente citado en las líneas que anteceden la Sala de Casación Laboral precisó que en los casos en los cuales la norma convencional no especifique los factores salariales a tener en cuenta para liquidar la prestación económica de jubilación, estos deberán consultar, en principio, lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. Señaló la Corporación que:

[...] en lo relacionado con los factores a ser tenidos en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, lo que se advierte es que el instrumento convencional respectivo, en verdad, nada dijo sobre ello, sin que tal omisión o indeterminación conlleve, indefectiblemente, como lo formula la censura a que todos los conceptos y por todo su valor deban ser computados y promediados para la obtención del

ingreso base pensional. Al respecto, esta Sala en diversas oportunidades al tratar asuntos con matices similares a los aquí abordados, particularmente en la sentencia CSJ SL3158-2017, dejó sentado lo siguiente:

[...] En otros términos, dada la generalidad del acuerdo convencional y la ausencia de una mención expresa de los rubros que constituyen la base para liquidar la pensión de jubilación, no puede hablarse de derechos adquiridos, como lo pretende hacer ver el censor, pues en este caso corresponde acudir a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de la misma anualidad, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, a fin de determinar los factores constitutivos de la base de liquidación; textos normativos en los que valga resaltar, no se enuncia la prima de vacaciones ni el subsidio de transporte peticionados por el actor, tal y como lo estimó la decisión atacada. De manera que en ningún yerro pudo incurrir el Tribunal al aplicar tales preceptos.

(...)

En igual sentido, se pueden consultar, más recientemente las sentencias CSJ SL15715-2015; SL4349-2015 y SL12399-2016.

En efecto, el criterio anterior ha sido reiterado por esta Sala, al decidir múltiples casos de similares contornos al aquí estudiado, particularmente, en tratándose de pensiones de jubilación convencional de servidores públicos donde el instrumento convencional nada dice de los factores a ser tenidos en cuenta para determinar la base salarial requerida para liquidar las respectivas prestaciones periódicas. En ese mismo sentido en la Sentencia CSJ SL4086-2017 la Corte señaló:

[...] En cuanto al segundo reparo, relacionado con los factores salariales que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de la actora, es de señalar que cuando un convenio colectivo de trabajo consagra una pensión de jubilación sin establecer en concreto cuáles son aquellos que deben observarse para su liquidación, o cuando el instrumento colectivo en el que supuestamente se establecieron, no obra al plenario, en ningún yerro incurre el juez si con fundamento en las normas que regulan la materia, establece cuáles son los que lo integran.

(...)

Del texto convencional se desprende que la norma solo hace referencia al promedio de lo devengado en el último año, sin que puede inferirse que se realiza remisión a norma especial, como tampoco hace referencia expresa a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, luego la norma aplicable es el Decreto 1158 de 1994.

De otra parte, es conveniente hacer claridad en que el Decreto 1045 de 1978 tiene como campo de aplicación «algunas entidades de la Administración Pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la Ley para su personal», a su vez el artículo 2º ordena que “ Para los efectos de este Decreto se entiende por entidades de la administración pública del orden nacional la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales” (CSJ, rad. 39202, del 30 de junio de 2013)».

Así mismo, no le asiste razón al recurrente al señalar que se desconoce lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002 puesto que la norma que resulta aplicable, como se viene afirmando en estos eventos es el Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994. Entre otras razones por cuanto el Decreto 1158 de 1994 es una norma especial que regula los temas atinentes a las prestaciones económicas del sistema de seguridad social. Así mismo, la Corporación al momento de liquidar las pensiones de jubilación convencional o legal se remite a lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 (al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias: CSJ SL1925-2021, CSJ SL1023-2021, y CSJ SL718 -2020 entre otras.”

Es por ello, que de acuerdo al precedente citado por el máximo órgano de cierre de esta especialidad no hay lugar a entender que debe incorporarse conceptos diferentes a los expresados en la norma legal.

Y es que, considera la Sala que, niquiera revisando la norma convencional desde el punto de vista garantista o bajo el principio de favorabilidad podría entenderse que, dentro de los parámetros de liquidación pueden tenerse en cuenta los enunciados descritos por la parte actora como, pues el enunciado del artículo

tercero en comento no contiene oscuridad alguna que requiera ser descifrado por el juzgador, por lo cual, no hay lugar a interpretación alguna, y tener en cuenta otros valores, no sería consecuente a los lineamientos que la Sala Laboral ha dado respecto al entendimiento de los conceptos objeto de liquidación, y que se han recalcado en providencias CSJ SL1925-2021, CSJ SL1023-2021, y CSJ SL718 - 2020 entre otras.

Los pagos efectuados al actor correspondientes a textos y útiles, subsidio familiar Comfama, subsidio familiar convencional, viáticos y anticipo de viáticos y cesantías definitivas, al no ser parte del artículo 1 del decreto 1158 de 1994, **no podían incluirse al momento de liquidar la pensión anticipada del aquí demandante.**

Corolario de lo señalado y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, se confirmará la decisión absolutoria del *a quo*.

Sin costas en esta instancia

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia que se revisa en consulta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c63bce18e5c49eb48f6b386d1f96a8997b6a60909675d7aff4b26dbdd8644169**

Documento generado en 31/08/2023 02:11:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>